

ACUERDO IEEPCO-CG-105/2016, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL PARA EL RÉGIMEN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficialía Electoral para el régimen de Sistemas Normativos Internos, que se genera a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES:

- I. Con motivo de la Reforma Constitucional en materia político- electoral, promulgada por el Presidente de la República y aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero del dos mil catorce, se adoptó una nueva distribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales en las entidades federativas para las elecciones locales, en esa reforma se estableció que dichos organismos contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
- II. En el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de mayo del dos mil catorce, se publicó el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
- III. En la edición extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, fechada el treinta de junio del dos mil quince, se publicó el Decreto número 1263, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en diversas materias, entre las que se encontraba la Política Electoral, a fin de armonizar la reforma constitucional y legal en materia electoral.
- IV. Mediante Decreto número 1290, publicado en la edición extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, fechada el nueve de julio del dos mil quince, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

- V. Con fecha cinco de octubre del dos mil quince, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó resolución en las acciones de inconstitucionalidad radicadas en el expediente número 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015 y 62/2015, promovidas por los Partidos Políticos: Acción Nacional, Unidad Popular y Movimiento de Regeneración Nacional, así como por Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado; en el punto noveno de dicha resolución se determinó lo siguiente:

"NOVENO. Se declara la invalidez total del decreto 1290, publicado el nueve de julio de dos mil quince, en el tomo XCII, extra, del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por medio del cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, a partir de que se notifiquen estos puntos resolutivos al Congreso del Estado."
- VI. Con fecha ocho de octubre del año dos mil quince el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación ciudadana de Oaxaca emitió la declaratoria formal del inicio del proceso electoral 2015-2016, en el que se elegirán gobernador del Estado, diputados a la sexagésima tercera legislatura Constitucional, así como concejales a los ciento cincuenta y tres ayuntamientos que se eligen bajo el régimen de partidos políticos así como los cuatrocientos diecisiete ayuntamientos que eligen a sus representantes bajo el régimen de sistemas normativos internos en del Estado libre y soberano de Oaxaca.
- VII. Mediante el acuerdo del Consejo General de número IEEPCO-CG-21/2015 dado en sesión extraordinaria de fecha treinta de octubre del dos mil quince se aprobó el reglamento de la Oficial Electoral a fin de regular lo relativo a la fe pública de la que están investidos los funcionarios del Instituto.
- VIII. Que derivado de los procesos electorales en los municipios que se eligen a sus autoridades bajo el régimen de sistemas normativos internos, se han presentado a este instituto diversas peticiones para que la oficialía electoral certifique hechos y actos relacionados con sus procesos electorales, evidenciando la necesidad de que este Instituto coadyuve con dichos municipios para tales efectos.
- IX. Que mediante acuerdo dado en sesión extraordinaria el día once de octubre, la Comisión Permanente de Reglamentos tuvo a bien aprobar el de acuerdo por el que se propone a este Consejo General la aprobación del

Reglamento de la Oficialía Electoral para el régimen de Sistemas Normativos Internos.

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 1º de la Constitución Federal establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
2. Que el artículo 2º de apartado A, párrafo III reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad
3. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, dispone que en el ejercicio de sus funciones, son principios rectores de las autoridades electorales: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así mismo, establece que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a las bases que la misma Constitución establece y lo que determinen las leyes, del mismo modo establece que los Organismos Públicos Locales Electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
4. Que a su vez el artículo 26, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, a sus autoridades y representantes de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales garantizando la participación de hombre y mujeres en condiciones de igualdad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.
5. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 98, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en

sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley general, así como la constitución y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución, la referida ley general y las leyes locales correspondientes.

6. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 98, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ley local establecerá los servidores públicos que estarán investidos de fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral, así como su forma de delegación, los que deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán entre otras, las siguientes atribuciones:
 - a) A petición de los Partidos Políticos, dar fe de la realización de actos o hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales locales;
 - b) Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales, y
 - c) Las demás que se establezcan en las leyes de las entidades federativas.
7. Que el artículo 104, inciso p) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer la función de Oficialía Electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral.
8. Que el artículo 25, Base A, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones, es una función estatal que se realiza por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así mismo establece que la Ley promoverá las instituciones y prácticas democráticas en todas las comunidades indígenas.
9. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 114 TER, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones, estará a cargo de un órgano denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y del Instituto Nacional Electoral, gozará de autonomía

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Constitución local y la Legislación correspondiente.

- 10.** Que de conformidad con lo establecido por el artículo 13, párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, el ente público denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es un órgano autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica para su administración presupuestaria, y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. El ejercicio de sus funciones se sujetará a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
- 11.** Que el artículo 14, fracción VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, establece que son fines del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, entre otros, reconocer, respetar, salvaguardar y garantizar los sistemas normativos internos de los municipios y comunidades indígenas, en lo referente a su libre autodeterminación expresada en su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización política y elección de autoridades.
- 12.** Que el artículo 26, fracciones I, XLVII y XLVIII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, establece que son atribuciones de este Consejo General, reglamentar su propia organización y funcionamiento; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, y las demás que por razón de competencia puedan corresponderle.
- 13.** Que la jurisprudencia 15/2008 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).” Prescribe que las autoridades electorales están obligadas a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme al sistema de usos y costumbres, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance. La autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios.

14. Que en la tesis jurisprudencial CXLIII/2002 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA EN LAS ELECCIONES.” Establece que para dar vigencia al derecho político electoral de los pueblos y comunidades indígenas, para elegir a los concejales al ayuntamiento municipal respectivo de acuerdo con sus “usos y costumbres”, el Instituto debe desplegar una actuación apegada a la Constitución Federal y local, disponiendo y previendo lo suficiente, razonable y necesario para alcanzar dicho propósito, en virtud de que es la autoridad competente en la que se delega la función estatal de organizar y desarrollar los actos de interés público relativos a las elecciones y que agrupa para su desempeño, en forma integral y directa, las facultades relativas a la preparación de la jornada electoral, la realización de cómputos y el otorgamiento de constancias, entre otras, en términos de lo prescrito en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución federal y 25, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Constitución local.
15. Que en el estado de Oaxaca, al amparo de la Constitución Federal y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reconocen que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Por ello, los pueblos y comunidades indígenas elegirán de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, fortaleciendo con ello el carácter pluricultural de nuestra Entidad y de la Nación.

En dichos municipios, la Asamblea General Comunitaria es por regla general el máximo órgano de autoridad y toma de decisiones, por lo que las autoridades administrativas están obligadas a respetar el ejercicio del derecho de autodeterminación, pudiendo interactuar de forma respetuosa con los integrantes de la comunidad, en aras de garantizar la vigencia efectiva de sus sistemas normativos tradicionales.

Si bien las asambleas comunitarias pueden realizar sus procesos electivos sin la intervención de autoridades externas, la legislación también prevé que, con el propósito de fortalecer la participación y representación política en el país, las autoridades municipales pueden solicitar el apoyo de las autoridades administrativas electorales para la organización de sus comicios con diferentes grados de intervención.

En estos casos, este Instituto Electoral ha desplegado su actuación bajo los principios de maximización de la autonomía, así como de mínima restricción de dicho derecho y sólo en los casos en que sea estrictamente necesaria y razonable, en los términos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, durante los procesos de renovación de autoridades municipales en 2016, diversos municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, han solicitado la intervención de la Oficialía Electoral para que realice la certificación de hechos y actos con el fin de dotar de certeza jurídica a sus procesos electivos.

No obstante lo anterior, tras la invalidez del decreto por el que se había expedido la legislación secundaria en la materia, este Consejo General ha aprobado mediante su facultad reglamentaria diversos reglamentos y lineamientos para dotar de certeza los diversos actos de la función electoral, sin que escape de este tamiz las elecciones realizadas bajo los sistemas normativos indígenas de los cuatrocientos diecisiete ayuntamientos en el estado.

De esta forma al no contar con la legislación necesaria para reglamentar el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral en los procesos electorales que se presenten bajo el régimen de sistemas normativos internos, a fin de brindar de mayores herramientas a los pueblos y comunidades indígenas, este Consejo General estima conveniente aprobar el proyecto de reglamento que regule la función de la Oficialía Electoral en el régimen de sistemas normativos internos.

Tal hecho no contraviene el marco jurídico nacional ni convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas, en virtud de que se reglamenta la actuación del Instituto y no de las instancias municipales que de manera primigenia y conforme a sus propios Sistemas Normativos, tienen la atribución de dar fe de los actos y hechos relativos a sus procesos electorales. En este sentido, se respeta esta atribución originaria la que continuarán desarrollando en la forma en que hasta ahora lo han hecho y sólo se establecen casos excepcionales en los que el instituto habrá de intervenir bajo los principios de subsidiariedad, pluriculturalidad y pleno respeto al derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades y municipios.

No pasa desapercibido que el Reglamento presentado tiene como base el principio de Subsidiariedad, que implica que en primera instancia,

corresponderá a la autoridad municipal u órgano electoral de cada comunidad, atender la solicitud de certificación correspondiente, y sólo en los casos previstos en el reglamento, dicha función la podrá desarrollar el personal habilitado de este Instituto, de tal suerte que atendiendo a la especificidad cultural del municipio de que se trate se respetara su sistema normativo.

Bajo este enfoque, el ejercicio de la oficialía electoral, en municipios que se rigen por sus sistemas normativos, será un recurso adicional o extraordinario del proceso electoral que se activará en coadyuvancia con las autoridades locales en orden de facilitar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales encargadas de la organización, preparación y supervisión de las elecciones.

No otorgarles la posibilidad de acceder a la fe pública que constitucionalmente obliga a este Instituto para certificar actos y hechos de naturaleza electoral mermaría los principios de la función electoral, así como, la obligación que tienen la autoridad electoral para vigilar que se respeten los principios constitucionales en dichos procesos.

En este punto es necesario mencionar que la propia Constitución Federal al establecer en el artículo 116 la obligación de los Institutos Electorales Locales, de contar con servidores públicos investidos de fe pública para certificar actos de naturaleza electoral le impone el deber de desempeñar dicha función en todo proceso electoral, por lo que de ninguna manera lo hace circunscribiéndose al régimen electoral de partidos políticos, en ese sentido como se desprende de su lectura del citado artículo, toda vez que esta función no se vincula a un régimen electoral específico, por lo que deviene aplicable el principio general del derecho referente a que, donde la ley no distingue no le es dable al intérprete distinguir.

En estas condiciones, si las comunidades están planteado peticiones de esta naturaleza, la referida atribución no puede orientarse en sentido restrictivo, ni este Consejo General está en la aptitud jurídica de limitar las normas de rango constitucional, por el contrario, es obligación de este Consejo General vigilar que en sus acuerdos y resoluciones se procure la interpretación que favorezca la protección más amplia a las personas conforme al principio pro persona.

Por otro lado, se debe subrayar que cuando la constitución reconoce la existencia de dos regímenes electorales distintos, uno relativo al régimen de sistemas normativos indígenas, contenido en el artículo 2º Constitucional, en

virtud del cual, el Sistema Jurídico mexicano se integra del derecho formalmente legislado y el derecho indígena, implica que ambos derechos deben concebirse como un todo sostenido por dos columnas colocadas de forma paralela; la primera integrada por la normatividad creada por la vía legislativa formal y la otra, compuesta por todos los sistemas normativos indígenas vigentes en el país, sin que entre ellas exista subordinación.

Aunado a que ambos sistemas se encuentran supeditados al orden constitucional y convencional en el que los derechos humanos constituyen el parámetro fundamental. De esta manera, la disposición constitucional que establece la facultad de desarrollar la función de oficialía electoral está dirigida a todo proceso electoral con independencia del régimen al que se sujete. Robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis LII/2016 de rubro: "SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SE INTEGRA POR EL DERECHO INDÍGENA Y EL DERECHO FORMALMENTE LEGISLADO"; aprobada el pasado quince de junio del dos mil dieciséis.

Por otro lado la Normatividad Nacional establece que este Instituto puede disponer de aquellos recursos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de la Ley, siempre que su actuar este apegado a los principios de la función electoral. Obligando a esta autoridad a garantizar la correcta aplicación de las normas electorales en cada entidad; apoyados de herramientas de interpretación como lo son los criterios gramatical, sistemático y funcional con el fin de proteger los derechos humanos de los votantes en aquellos municipios donde renueven a sus cabildos municipales conforme a sus sistemas normativos indígenas.

Por todo lo anterior, este Consejo General considera consecuente el aprobar un reglamento que sirva como instrumento jurídico que permita que la función de fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral que se presenten en el desarrollo de los procesos electorales del régimen de sistemas normativos indígenas, se apeguen a los principios de certeza y legalidad.

Se debe destacar que el reglamento generado está dirigido única y exclusivamente a la función desarrollada por este Instituto, establece las reglas a las que deberán sujetarse los servidores públicos que desempeñaran esta función, así como la forma en la que deberán ser habilitados al hacerlo, define el ámbito espacial, material y temporal en que deberá despegarse la función de la Oficialía Electoral, los requisitos mínimos para la procedencia

de las peticiones para su ejercicio, así como las condiciones de validez de las diligencias en las que practicará la fe pública en los procesos electorales del régimen de sistemas normativos indígenas. Asimismo, el reglamento toma en consideración las particularidades de dichos procesos electorales y de manera especial dispone que la función de oficialía electoral debe de ser apegada y respetuosa de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.

Por las consideraciones antes desarrolladas, se considera procedente aprobar el Reglamento de la Oficialía Electoral para el Régimen de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que fue presentado a este Consejo General por la Comisión Parmente de Reglamentos.

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 98 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, Base A, párrafos tercero y cuarto; 114 TER, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 12, 14fraccion VII, 26, fracción I del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de la Oficialía Electoral para el Régimen de Sistemas Normativos Internos, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, anexo al presente acuerdo y que forma parte integral del mismo.

SEGUNDO. El Reglamento objeto del presente acuerdo, entrará en vigor a partir de su aprobación.

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en atención a lo dispuesto por los artículos 15, párrafo 2 y 34, fracción XII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para lo cual, se expide por duplicado el presente acuerdo; así mismo, hágase del conocimiento público en la página de Internet de este Instituto.

Así lo resolvieron por mayoría de cinco votos a favor, las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, siguientes: Maestro Gerardo García Marroquín, Consejero Electoral; Maestro Filiberto Chávez Méndez, Consejero Electoral; Maestra Nora Hilda Urdiales Sánchez, Consejera Electoral; Maestra Elizabeth Bautista Velasco, Consejera Electoral y el Maestro Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, Consejero Presidente, con los votos en contra de la Licenciada Rita Bell López Vences, Consejera Electoral y el Licenciado Uriel Pérez García, Consejero Electoral, quienes emiten voto particular, así como el voto concurrente del Maestro Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, Consejero Presidente, en la sesión ordinaria celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día catorce de octubre del dos mil dieciséis, ante el Secretario Ejecutivo, quien da fe.

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO EJECUTIVO

GUSTAVO MIGUEL MEIXUEIRO NÁJERA FRANCISCO JAVIER OSORIO ROJAS

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA, Y DEL ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL RITA BELL LÓPEZ VENCES, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO IEEPCO-CG-105/2016, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL PARA EL RÉGIMEN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS.

Por medio del aludido acuerdo, se aprobó por mayoría de votos el Reglamento de la Oficialía Electoral para el Régimen de Sistemas Normativos Internos, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en virtud de diferir con dicho ordenamiento, emito el presente voto en los siguientes términos:

1. El ordenamiento en cuestión, transgrede el principio de maximización de la autonomía y mínima intervención.

La reforma al artículo 2º constitucional, en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, reconoció la composición pluricultural de la Nación; estableció que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Ahora bien, el párrafo del apartado A del artículo 2º constitucional establece que la propia Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes (fracción II).
- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la “soberanía de los estados” (fracción III).
- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus

costumbres y especificidades culturales respetando la preceptiva constitucional. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura (fracción VIII).

Ahora bien, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-1714/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que de la interpretación sistemática y, por lo tanto, armónica, así como funcional de lo dispuesto en los artículos 2º, apartado A, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafos 1 y 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 46, párrafo 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como 29, inciso c), y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio de maximización de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, que implica también la minimización de las restricciones a su ejercicio, forma parte y potencializa su derecho a la autonomía o autogobierno, en el entendido de que si bien este último no constituye un derecho absoluto, toda limitación debe ser estrictamente necesaria y razonable, para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y libertades fundamentales de los integrantes de dichas comunidades, así como para satisfacer las necesidades de una sociedad democrática y plural, considerando el contexto específico de cada comunidad, a fin de que no se impongan restricciones que incidan desproporcionadamente en el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y al desarrollo pleno de su cultura.

Lo anterior encuentra respaldo argumentativo en las tesis VIII/2015 y XXXIII/2014, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación de rubros: COMUNIDADES INDÍGENAS. TODA RESTRICCIÓN DE SU AUTONOMÍA DEBE SER ERICTAMENTE NECESARIA Y RAZONABLE y COMUNIDADES INDÍGENAS. EL PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA IMPLICA LA SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO, respectivamente.

Así mismo a través de diversas sentencias, el citado Tribunal Electoral ha fijado que, el principio de maximización sugiere privilegiar la autonomía indígena y no el de la injerencia en las decisiones que les corresponden a los pueblos, por ejemplo, en el ámbito de sus autoridades, instituciones, sistemas jurídicos y opciones de desarrollo. Los pueblos indígenas son parte constitutiva del Estado y debe protegerse su derecho colectivo a participar de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses.

En ese sentido, considero que el Reglamento aprobado trastoca dichos principios pues resulta ser injerencista de los sistemas normativos internos de cada comunidad al tratar de implementar una figura jurídica que resulta ser ajena a la propia cosmovisión de las comunidades y que por consecuencia deja de potencializar los derechos de autonomía y libre determinación, siendo que son las propias comunidades a través de las determinaciones adoptadas en sus asambleas, quienes determinan la forma en que deben conducirse, gobernarse y determinar su propia normatividad siempre y cuando claro está, estos no trastoquen los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales y las constituciones federal y local.

En aplicación al principio de mínima intervención, más allá de contar con un Reglamento, que abre la posibilidad de ejercer la función de la oficialía electoral para el régimen de Sistemas Normativos Indígenas en los supuestos a que refiere el artículo 9 del dicho ordenamiento, considero que cada solicitud podría ser analizada por el Consejo General y en sobre cada asunto en concreto se debería determinar la forma y términos en que se realizara una certificación de actos o hechos, designando para ello al personal adecuado en cada caso concreto.

2. El ordenamiento aprobado, minimiza las determinaciones asumidas por la Asamblea General Comunitaria.

A mi consideración, el precitado Reglamento merma las atribuciones reconocidas a las asambleas generales comunitarias, como máxima autoridad al interior de los municipios que electoralmente se rigen por un

sistema normativo interno. Ello es así puesto que, si la finalidad de ejercer la función de oficialía electoral en estos municipios es el *dar fe pública para constatar en los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, actos y hechos en la organización, desarrollo y validez de sus elecciones de Concejales al Ayuntamiento*, debe decirse que es la propia Asamblea General de cada municipio como máxima autoridad al interior de las comunidades, quien al resolver cualquier tipo de conflicto interno que pueda suscitarse dentro de su procedimiento de elección y determinar la forma en que conducen el mismo con el respaldo de las y los ciudadanos que conforma esta Asamblea, dota de certeza y validez los hechos y actos que se susciten, siendo que a esta autoridad administrativa electoral, únicamente compete el verificar que no se hayan trastocado ningún derecho fundamental y a partir de ello, calificar la elección.

De esta forma, las determinaciones aprobadas por las Asambleas, dotan de absoluta certeza su actuar, pues son las y los propios ciudadanos de cada comunidad quienes determinan con base en el derecho de autogobierno y libre determinación, las mejores directrices para el desarrollo de su comunidad.

3. El Reglamento no contempla diversas circunstancias que pueden suscitarse en su aplicabilidad

Desde luego que el ordenamiento aprobado, pudiera en ciertos asuntos, auxiliar y facilitar a este Órgano Electoral en el ejercicio de su función, no obstante debe contemplarse que al existir 417 municipios que se rigen por su normativa interna, existen 417 sistemas normativos. Luego entonces es aventurado que el personal habilitado por este instituto, pueda dar fe de actos y hechos que la propia comunidad reconoce, acepta y legitima como propio y que nuestros servidores desconozcan o interpreten a partir de una cosmovisión completamente distinta y ajena a la de la comunidad a la que acuda. De ahí que, no podemos sesgar esta determinación como si se tratara de un sistema de elección uniforme para todos los municipios ya

que la diversidad de sistemas normativos internos, merece atención y cuidado especial a fin de no obstaculizar su libre determinación y autonomía

De igual forma, otra limitante que deja de contemplarse es el hecho que, en muchas comunidades, sus asambleas se realizan en todo o en parte, a través de su lengua originaria, por lo que al no contarse con personal suficiente que conozca dichas lenguas, se vería impedido y limitado en el ejercicio de su función y se corre el riesgo de tener una mera interpretación apartada de lo que en la realidad haya acontecido.

Así mismo, no se contempla cómo se resolverían por este Instituto aquellos asuntos en que la certificación efectuada por los funcionarios públicos, se contraponga con lo dicho en Acta de Asamblea General respaldada por las y los ciudadanos que a ella asistan, lo que lejos de abonar a la certeza de los acontecimientos ocurridos, solo genere conflictos al interior de una comunidad.

Aunado a lo anterior, dentro del cuerpo del acuerdo en mención no se hace referencia al número de solicitudes y situaciones concretas en que se ha solicitado el ejercicio de la función electoral por parte de comunidades y pueblos indígenas, lo que daría mayor soporte al porqué de la necesidad de esta normativa.

Por lo anterior, me aparto del multicitado Reglamento de la Oficialía Electoral para el Régimen de Sistemas Normativos Internos, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobado por la mayoría de las y los Consejeros Electorales de este Instituto.

CONSEJERA ELECTORAL

LICDA. RITA BELL LÓPEZ VENCES